

23ª SESION DE PRÓRROGA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1901

PRESIDENCIA DEL DOCTOR QUIRNO COSTA

SUMARIO: I.—Asuntos entrados.

II.—Aprobación, modificado, de un despacho de la Comisión de Legislación, en un proyecto de ley, en revisión, sobre reforma de la justicia federal.

III.—El señor Presidente manifiesta que el señor Ministro ha comunicado que concurrirá el martes á la discusión de los proyectos financieros.

SENADORES PRESENTES En Buenos Aires, á los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos uno, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente y los señores senadores al margen consignados, se abre la sesión con inasistencia de los señores Benegas, Gálvez, Pérez, Quiroga y Virasoro, con licencia, Cané, Doncel, Herrera, Mantilla y Mitre, con aviso.

Álvarez
Aparicio
Avellaneda
Carbó
Del Campillo
Díaz
Figueroa
Figueroa Alcorta
García
Maciá
Mendoza
Morón
Palacio
Pellegrini
Puccio
Terán
Uriburu (F.)
Uriburu (J. E.)

Leída y aprobada el acta de la anterior de 24 y 26 del corriente, (22ª de prórroga), se da cuenta de los

I ASUNTOS ENTRADOS

DESPACHO DE COMISIONES

La del Interior se ha expedido en el proyecto de ley, en revisión, sobre construcción de vías á alto nivel en la estación Sola.

—A la orden del día.

Sr. Presidente—La Comisión de Presupuesto ha presentado su informe escrito; y, como no está á la orden del

día, se repartirá á los señores senadores.

Sr. Pellegrini—Que se imprima.

Sr. Presidente—Ya está impreso.

II

Sr. Presidente—Se va á pasar á la orden del día.

—Se lee:

Honorable Senado:

La Comisión de Legislación ha tomado en consideración el proyecto de ley, en revisión, sobre reforma de la Justicia Federal; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación, con las modificaciones contenidas en el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—El Poder Judicial de la Nación será ejercido:

1º—Por la Corte Suprema de Justicia

2º—Por cuatro Cámaras Federales de Apelación.

3º—Por los jueces de Sección de la Capital y de cada una de las Provincias.

CAPÍTULO I

DE LA SUPREMA CORTE

Art. 2º—La Suprema Corte conocerá ori-

ginaria y exclusivamente, de las causas mencionadas en el artículo 101 de la Constitución Nacional y artículo 1º de la ley número 48, de 14 de septiembre de 1863. y, en revisión, con arreglo al artículo 241 de la ley 50. de la misma fecha.

Art. 3º—La Corte Suprema conocerá también en última instancia por apelación y nulidad en las sentencias definitivas de las Cámaras Federales de Apelación en los siguientes casos:

1º—De las que fueren dictadas en las demandas contra la Nación á que se refiere la ley número 3,952 de 6 de octubre de 1900.

2º—De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares ó corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas ó por cumplimiento de contratos por defraudación de rentas nacionales ó por violación de reglamentos administrativos y, en general, en todas aquellas causas, en que la nación ó un recaudador sea parte actora, siempre que el valor disputado excediere de cinco mil pesos.

En la presente disposición no se comprenden las acciones fiscales por cobro ó defraudación de rentas ó impuestos que sean exclusivamente para la Capital y Territorios Nacionales y no generales para la Nación.

3º—De las que recayesen en todas las causas á que dieren lugar los apresamientos ó embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente ó regularidad de sus papeles.

4º—De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros.

5º—De las dictadas en cualquier causa criminal, por los delitos de traición, rebelión, sedición, y en las de homicidio, incendio ó explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar á bordo de buques nacionales ó por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio ó penitenciaría.

Art. 4º — En los casos que, con arreglo á lo establecido en el artículo 551 del Código de Procedimientos en lo Criminal proceda el recurso de revisión contra las sentencias de las Cámaras Federales, la Corte Suprema conocerá de dicho recurso por apelación.

Art. 5º — Conocerá igualmente de los recursos que se promovieran por retardo ó denegación de justicia, en los casos á que se refieren los artículos anteriores.

Art. 6º — La Corte Suprema conocerá, por último, en grado de apelación de las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Federales de Apelación, por las Cámaras de Apelación de la Capital, por los Tribunales Superiores de Provincia y por los Tribunales Superiores Militares, en los casos pre-

vistos por el artículo 14 de la ley número 48, de 14 de septiembre de 1863.

Art. 7º—Si procediese el recurso del artículo anterior, y la sentencia de la Cámara ó Tribunal fuese confirmatoria de la de los Juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese, si el fallo fuera revocado por la Suprema Corte.

Dicha fianza será calificada por la Cámara ó Tribunal que le hubiere dictado y quedará de hecho cancelada, si la sentencia recurrida fuere confirmada por la Suprema Corte. El fisco nacional estará exento de la fianza á que se refiere esta disposición.

Art. 8º — En los casos en que la Corte conozca en grado de apelación, recibido el expediente, se dictará la providencia de autos y las partes podrán, dentro de los diez días comunes é improrrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre las causas, que se mandará agregar á los autos y sin más trámite quedará la causa conclusa para definitiva.

Art. 9º — La Suprema Corte dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten:

- a) Entre las Cámaras Federales de Apelación, entre ésta y un Juez ó Tribunal Superior local de la Capital, ó Juez y Tribunal Superior de Provincia.
- b) Entre un Juez de Sección y un Juez ó Tribunal Superior local de la Capital, ó un Juez ó Superior Tribunal de Provincia.
- c) Entre un Juez Letrado de Territorios Nacionales y un Juez ó Tribunal Superior local de la Capital, ó un Juez ó Tribunal Superior de Provincia.
- d) Entre un Juez ó Tribunal Superior local de la Capital y un Juez ó Tribunal Superior de Provincia; entre Jueces de distintas provincias, y entre un Tribunal Militar y uno de cualquier otra jurisdicción nacional ó provincial.

Art. 10—La Suprema Corte ejercerá superintendencia sobre las Cámaras Federales, Jueces de Sección, Jueces Letrados de Territorios Nacionales y demás funcionarios de la Justicia Federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

Art. 11—La superintendencia de la Suprema Corte comprende:

- 1º—Velar por el cumplimiento de esos reglamentos é imponer las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción.
- 2º—Exigir se le remita anualmente ó en cualquier tiempo una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas.
- 3º—Acordar ó denegar licencia á los miembros de las Cámaras Federales, Jueces de Sección, Jueces Letrados de los Territorios Nacionales y demás funcionarios de la Justicia Federal, pa-

ra ausentarse del lugar en que des empeñan sus funciones, por más de tres días, ó dejar de asistir al tribunal, juzgado ó oficina por más de una semana.

4º—Imponer á los mismos penas disciplinarias por faltas á la consideración y respeto debidos á la Corte ó á alguno de sus miembros, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia, ó por falta ó negligencia en el cumplimiento de su deber.

Las penas consistirán en prevenciones, apercibimientos ó multas que no excedan de doscientos pesos.

En caso de reincidencia, y cuando el abuso, la falta ó negligencia fuere grave, la Corte Suprema la pondrá en conocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fuesen cometidas por miembros de las Cámaras Federales de Apelación, por los Jueces de Sección y Jueces Letrados de los Territorios Nacionales; y cuando ellas fuesen cometidas por los Procuradores Fiscales, Defensores de menores, pobres y ausentes, los suspenderá, solicitando en seguida su exoneración del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO II

DE LAS CÁMARAS FEDERALES DE APELACIÓN

Art. 12—Habrán cuatro Cámaras Federales de Apelación, que serán compuestas cada una de tres miembros, y tendrá su asiento la primera en la Capital de la República, la segunda en la ciudad de La Plata, la tercera en la ciudad del Paraná y la cuarta en la ciudad de Córdoba, y ellas ejercerán en su respectiva circunscripción la jurisdicción apelada que les confiere la presente ley.

La primera circunscripción comprende la Capital de la República, las provincias de San Luis, de Mendoza, de San Juan y Santa Fe.

La segunda circunscripción comprende la provincia de Buenos Aires y los Territorios de la Pampa, del Neuquén, del Río Negro, del Chubut, de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La tercera circunscripción comprende las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y territorios del Chaco, Formosa y Misiones.

La cuarta circunscripción comprende las demás provincias y demás territorios que no se incluyen en las otras tres.

El ministerio público será desempeñado por un funcionario que tendrá el título de Procurador Fiscal de las Cámaras Federales de Apelación en la Capital y ciudad de La Plata. En las Cámaras de Paraná y Córdoba dicho cargo y el de Procurador Fiscal ante el Juzgado de Sección, será desempeñado por un sólo funcionario.

Art. 13—Las condiciones para ser miembros de las Cámaras Federales de Apelación y Procurador Fiscal de las mismas, y para su nombramiento, serán las que se requieren para ser miembros de la Suprema Corte.

Art. 14—No podrán ser simultáneamente jueces de la misma Cámara, los parientes ó afines dentro del cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviniente el que la causare abandonará su puesto.

Art. 15—Cada Cámara nombrará anualmente su Presidente, y actuará con el Secretario y demás empleados que le designe la Suprema Corte de conformidad con la ley de presupuesto.

Art. 16—Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación, en segunda instancia en todos los casos enumerados en el artículo 3º de la presente ley.

Art. 17—Las Cámaras Federales conocerán en grado de apelación y en última instancia:

1º—De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de Sección en las causas de su competencia, que no fueren de las enumeradas en el art. 3º de la presente ley, y siempre que el valor disputado, en las causas civiles y comerciales, exceda de quinientos pesos.

2º—De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales, aunque fueren dictados en causas criminales y del fuero común.

3º—De los recursos por retardación ó denegación de justicia por parte de los Jueces de Sección ó de los Letrados de los Territorios Nacionales.

4º—De las consultas que elevaren los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales en los casos del artículo 42 de la ley de organización de dichos territorios.

Art. 18—Contra las sentencias dictadas por las Cámaras Federales en los casos del artículo anterior, sólo se concederán los recursos autorizados por los artículos 4º y 6º de la presente ley.

Art. 19—Las Cámaras Federales conocerán de las cuestiones de competencia que se susciten entre los Jueces de Sección, entre los Jueces Letrados de los Territorios Nacionales y entre éstos y aquéllos.

Art. 20—Las Cámaras Federales observarán en materia civil y comercial, los procedimientos establecidos para la Suprema Corte, en la ley número 50 de 14 de septiembre de 1863 y leyes especiales, y en materia penal el Código de Procedimientos Criminal de la Nación.

Art. 21—En caso de recusación ó impedimento de alguno de los miembros de las Cámaras de la Capital, el Tribunal se integrará insaculando á la suerte el número de conjueces que sea necesario de la lista á que se refiere el artículo 23 de la ley número 50 de 14 de septiembre de 1863.

Las Cámaras Federales de La Plata, Córdoba y Paraná, se integrarán en la misma forma de la lista de conjueces que se insaculare anualmente para suplir los Jueces de Sección respectivos con arreglo al artículo 2º de la ley de 24 de septiembre de 1878.

Art. 22—Las Cámaras Federales dictarán un reglamento interno y lo someterán á la aprobación de la Suprema Corte.

Art. 23—Sin perjuicio de la superintendencia de la Suprema Corte, las Cámaras Federales de Apelación podrán corregir á sus Secretarios y demás empleados subalternos con apercibimientos, suspensión sin goce de sueldo por término que no exceda de quince días ó multas hasta cien pesos, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, desobediencia ó faltas á la consideración y respeto debidos al Tribunal ó á alguno de sus vocales.

Tendrán también la facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pesos ó prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieren contra su dignidad en los alegatos y las audiencias de las causas y las que se cometieren contra su autoridad obstruyendo el curso de la justicia ó en daño de las partes, sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por daños y perjuicios.

Art. 24—Los expedientes actualmente en trámite ante la Suprema Corte, que sean del conocimiento de las Cámaras Federales de Apelación, según las disposiciones de la presente ley, se distribuirán para su resolución entre las distintas Cámaras creadas y de acuerdo con la jurisdicción del Tribunal de origen, una vez terminado su trámite. Las causas especificadas en el artículo 16 de la presente ley, que á la fecha de su promulgación se encontraren pendientes del fallo de la Suprema Corte, serán decididas por ésta.

Art. 25—En la primera instalación de las Cámaras Federales, los jueces nombrados para la que tenga su asiento en la Capital de la República, prestarán juramento ante la Suprema Corte de desempeñar fielmente su cargo de conformidad á lo que prescribe la Constitución y las leyes de la Nación; los nombrados para los que tengan su asiento en La Plata, Córdoba y Paraná, lo prestarán ante los Gobernadores de Provincia. En lo sucesivo prestarán ese juramento ante las mismas Cámaras. Los secretarios jurarán el fiel desempeño de sus funciones ante los mismos tribunales.

Art. 26—Los miembros de las Cámaras Federales de la Capital y su procurador fiscal gozarán del mismo sueldo asignado á los miembros de las Cámaras de Apelación de la Capital, y tendrá un secretario con setecientos cincuenta pesos, un ujier con doscientos, un oficial primero con ciento veinte, tres escribientes con cien pesos cada uno; gastos de oficina, quinientos; alquiler de casa, quinientos; tres ordenanzas, á cincuenta pesos cada uno; un auxiliar para el fiscal con cien pesos; gastos de oficina para el mismo, cincuenta; un ordenanza para el mismo, cincuenta pesos; todo al mes.

Los miembros de la Cámara Federal de La Plata y su Procurador Fiscal, tendrán mensualmente mil doscientos pesos cada uno y un secretario con quinientos; un ujier con ciento ochenta; un oficial 1º con ciento veinte, tres escribientes con ochenta cada uno; gastos de oficina y alquiler de casa, quinientos; tres ordenanzas con cincuenta cada uno; un auxiliar del fiscal con ochenta; gastos de oficina

para el mismo, cincuenta; un ordenanza para el mismo, cincuenta.

Los miembros de las Cámaras Federales de las ciudades de Córdoba y Paraná, y los procuradores fiscales gozarán del sueldo mensual de ochocientos pesos, y tendrá cada Cámara un secretario con cuatrocientos pesos; un ujier con ciento ochenta pesos; un oficial mayor; un oficial primero; tres escribientes con ochenta pesos; gastos de oficina y alquiler de casa, trescientos pesos; dos ordenanzas á cuarenta pesos cada uno; un auxiliar del fiscal, ochenta pesos; ordenanza para el mismo, cuarenta pesos.

Estos sueldos y asignaciones regirán mientras se provea á ellos en la ley de presupuesto.

CAPÍTULO III

DE LOS JUECES DE SECCIÓN

Art. 27—La jurisdicción y competencia de los jueces de sección, será la determinada en la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales el 14 de septiembre de 1863 y demás leyes especiales dictadas por el honorable Congreso.

Art. 28—Quedan derogadas las disposiciones contrarias á la presente ley.

Art. 29—Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de la Comisión, diciembre 24 de 1901.

Carbó.—Palacio.

Sr. Presidente—Está en discusión en general.

Sr. Palacio—Pido la palabra.

Muy cortos momentos ocuparé la atención de la Cámara para dar las razones del dictamen que acaba de ponerse en discusión; y esto porque, además de la premura del tiempo, se trata de un asunto que ha sido tan discutido en las cámaras, en los consejos de gobierno y en la prensa diaria, que todos los señores senadores están perfectamente enterados de él.

La necesidad de una reforma en la justicia federal viene siendo una preocupación pública hace mucho tiempo. Se apuntan á menudo los vicios reales ó supuestos de que adolece actualmente; se exponen los intereses trascendentales de la República, directa y desfavorablemente afectados por aquellos; se señala á los hombres, á las leyes orgánicas y aún á nuestro modo de ser político como causantes de los males notados; y el clamor público se repite á diario, con daño evidente de la autoridad moral de los tribunales, que van poco á

poco desmereciendo en el concepto de las gentes. Es, pues, obra de patriotismo y de conveniencia remediar estos males.

Sobre larga y enojosa, sería inútil la tarea de discutirlos, á propósito del dictamen que está á la consideración de la Cámara. Pero existe uno, entre todos los que se apuntan, que es evidente é indispensable, y que hace indispensable la reforma propuesta. Ese mal, señor Presidente, consiste en la lentitud con que se administra la justicia, lentitud que torna ilusorios los derechos é intereses que está llamada á tutelar, que fomenta por lo mismo el fraude y las artimañas dolosas de los que, faltos de rectitud, buscan en la eterna demora la impunidad, creando, como lo han conseguido, una situación de inseguridad y desprestigio para los más vitales intereses de la República.

Los factores de este mal son complejos: en parte radican en lo complicado de nuestra legislación procesal; pero sobre esta y otras consideraciones, está la de que son insuficientes los tribunales de apelación, para el número de causas que tienen que resolver.

Basta, para comprender esto, señor Presidente, enunciar que la Corte Suprema de Justicia tiene, poco más ó menos, 2000 expedientes atrasados; entran alrededor de 1000 cada año; de éstos se fallan la mitad y el resto pasa á aumentar la montaña que duerme en los estantes. De este sólo hecho surgen consideraciones las más graves y que han dado lugar á que se busque perpétuamente un remedio á este mal.

Dos han sido los sistemas ó proyectos que han venido discutiéndose desde hace mucho tiempo: el del aumento de miembros de la Suprema Corte á nueve ó diez, para que, formando cámaras parciales de tres miembros en un caso, de seis en otro y de corte plena en los demás, despacharán estos expedientes.

Yo no discutiré la bondad de este proyecto de organización, cuyo exponente autorizado y sincero ha sido en estos días en la Cámara de Diputados el doctor don Manuel Argañaraz, y no lo discutiré, porque ha sido siempre un propósito que no ha tenido aceptación en el público, en el seno de los poderes

del Estado, ni en las cámaras del Congreso.

El otro es el de los tribunales intermedios ó cámaras federales de apelación, que es lo que ha prevalecido siempre y lo que encarna también toda nuestra tradición constitucional y legislativa.

Para no abundar en citas y detalles, diré solamente que este sistema, con pequenísima diferencia con el propuesto por la Comisión, ha sido alguna vez ley de la Nación, en el Congreso de 1858. Posteriormente, en 1863, la Comisión de Legislación del Senado, compuesta por hombres eminentes, lo aconsejó asimismo, resolviendo su aplazamiento por circunstancias especiales de aquella época; y últimamente, en 1896, en esta misma Cámara de Senadores fue sancionado un proyecto semejante al que está en discusión.

Siempre se ha tenido en vista la conveniencia de descentralizar por este medio la justicia, porque en la Capital es rara: no están en relación los intereses que se debaten generalmente en las provincias del interior con los emolumentos que aquí legítimamente tienen que cobrarse.

Existe además otra dificultad. Una persona del interior no conoce sino los hombres eminentes de la Capital; sabe quien es el doctor Pellegrini, sabe quién es el doctor Manuel Quintana, y quién es el doctor Alcorta, como abogados; pero los intereses no se avienen, no están en relación con la importancia de estas personas, ni es posible que ellas pudieran prestarles una atención asidua y merecida. Esto hace que la generalidad de los litigantes, que no tienen vinculaciones aquí, pierdan este beneficio de la segunda instancia y renuncien á toda apelación.

Es, entonces, necesario aproximar los tribunales de apelación á los lugares donde se ventilan estas cuestiones, facilitando y amparando si se quiere su resolución para tener algún día una justicia correcta, una justicia esparcida que alcance á los pobres y á los ricos, como se ha dicho alguna vez.

Por consiguiente, dado el cúmulo de antecedentes de estos proyectos, puede asegurarse que el que ha sido confeccionado en la Cámara de Diputados y que

presenta la Comisión, no es más que el resultado de todas las ideas que, unas veces por el Poder Ejecutivo, otras por comisiones especiales y las demás por miembros del Congreso, han sido traídas al debate.

La Comisión, cuando recibió el asunto á estudio, tuvo muchas vacilaciones; y, entonces, su primer acto fué llamar al señor Ministro de Justicia y preguntarle: ¿Cree el señor Ministro que el proyecto venido en revisión es oportuno? ¿Cree que es posible con la estructura con que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados? El señor Ministro respondió afirmativamente á estas preguntas y manifestó opiniones que encuadraban con las de la Comisión, y por ese motivo ésta se resolvió á despacharlo en la misma forma, ó con pequeñas modificaciones.

La Comisión ha tomado en cuenta todas las objeciones fundamentales y aun de detalle que se hacen al proyecto. Las ha mirado con la mayor altura é interés; y, si fuera permitido recordar reminiscencias de lo pasado en el seno de aquella, yo podría atestiguar en ese caso la altura moral con que alguno de los miembros de esa comisión, el distinguido Senador por Entre Ríos, ha procedido.

Ha tenido en cuenta las objeciones de economía que se hacen para decir que la situación precaria del país, situación que la Comisión reconoce difícil, es un obstáculo á estas creaciones; pero se encontró en presencia de esta dificultad, ocasionada por un gasto más, y se preguntó: ¿Una suma relativamente insignificante basta para anular lo que es una necesidad reclamada por el país, hace tantos años, en una materia tan fundamental como es la justicia, que afecta intereses tan trascendentales? Y desde luego se comprendió que más daño hace al país, más sufre la riqueza pública con la falta de justicia, por la escasez de tribunales, que por el poco dinero que pueda gastarse en esta institución.

Se ha dicho también que en los distritos creados por el proyecto faltaría el personal para un foro ilustrado y circunspecto. Esta objeción no puede comprender á Buenos Aires, capital y provincia; no puede comprender tampoco á

la ciudad de Córdoba, cuya notoriedad la coloca al abrigo de toda objeción. Sería en todo caso dirigida á lo que podríamos llamar circuito del litoral, jurisdicción del litoral, y la Comisión ha recogido antecedentes y puedo asegurar que la matrícula de sus tribunales se compone de cuarenta y tantos abogados, todos hombres respetables, que bastarán y sobrarán para las necesidades de aquella Cámara.

Se ha dicho que estos tribunales estarán sujetos á influencias malsanas de nuestra política militante, y se ha llegado á afirmar que los gobernadores de provincia los avasallarán; pero, esto no merece discutirse; y, si lo enuncio es tan sólo para cumplir este propósito de no dejar silenciado nada favorable ó adverso al despacho. Contraría este razonamiento la situación de los jueces federales: ahí están solos, aislados, sin que jamás los alcance el menor acto de superintendencia, y sin embargo en todos los tiempos, hasta en las épocas más accidentadas de nuestra revoltosa vida política, han salvado incólume la dignidad del puesto.

Nunca se producen quejas contra la honradez ó la rectitud de procederes de esos magistrados, y si pudiera citarse algún caso excepcional de intromisión indebida en la vida política, esa cita, por lo mismo que constituye una excepción, puede hacerse de cualquier parte del país y de la misma capital de la República.

Se ha agregado, para completar esta serie de suposiciones hasta cierto punto injuriosas, que la creación de estos puestos obedecía á agraciarse á personas determinadas. La Comisión no las ha tomado, ni las ha debido tomar en cuenta: le basta la manifestación que se hizo al señor Ministro de Justicia, de que el éxito de estos tribunales y su prestigio dependerían de la elección que el Poder Ejecutivo hiciese de las personas llamadas á servirlos, y si se procede con patriotismo y acierto nada debemos temer.

Se ha dicho, por último, que no hay número suficiente de causas para las cuatro cámaras. Esta es ya una cuestión de estadística que, en ocasión determinada, ha sido hasta repudiada por

el Poder Ejecutivo en su mensaje de 1899, mandando los proyectos de reforma judicial: tales eran las contradicciones á que se prestaba; pero no es posible prescindir de ella.

La Comisión no ha seguido en esta parte el procedimiento que siguieron en 1896 la Comisión de Legislación y la Cámara. En esa época se tomó el número de causas que se fallaban en los juzgados de primera instancia, número que asciende á una cifra considerable, que no puedo dar en este momento porque la estadística respectiva está en poder del señor Ministro.

Se hizo un cálculo aproximado de las apelaciones y se estableció lo que correspondía á cada uno de los distritos; pero la Comisión no ha querido tomar este punto de partida, sino otro, que es más desfavorable, á fin de que los señores senadores puedan comparar y resolver lo que estimen más conveniente.

La estadística, en apariencia, arroja cifras relativamente pequeñas; pero una vez estudiada se presta á consideraciones de otro orden.

Ha tomado la Comisión la estadística de las causas que se encuentran en apelación—estos son datos oficiales,—y ha llegado á los siguientes resultados:

Causas que existían á sentencia de la Suprema Corte hasta el 31 de julio de este año, 2037. Han entrado desde el 31 de julio hasta el 30 de noviembre 325: lo que hace un total de 2362—y han salido en todo el año 611:

Saldo total: 1751.

De las 2362 causas, habrá 248 de jurisdicción originaria y exclusiva; de modo que, sacando éstas del número total, quedan 2114 de jurisdicción apelada y á dividirse entre las cámaras federales en la proporción que se establezca.

Corresponde conocer, por consiguiente, á la Suprema Corte con jurisdicción originaria y exclusiva, según el artículo 2º del proyecto, 144; entradas este año, 43; por recursos autorizados por el artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863 atrasadas, 64; entradas este año, 17; por revisión, 10; por competencia, 10; lo que hace un total de 248. A la misma Suprema Corte, por apelación, según los artículos 3, 4, 5, 6 y 9 del proyecto, causas ya existentes,

419; causas en cada año, una cuarta parte del total de entradas, 222; total que se calcula que correspondería á la Suprema Corte por jurisdicción originaria y por apelación, 889.

A la Cámara Federal de la Capital, según proyecto, las causas que le corresponderían en segunda y última instancia, calculando la tercera parte del total de entradas ó existentes por ser la proporción aproximada en que se encuentran en el último año las de la Capital, deduciendo las de jurisdicción originaria y demás exclusivas de la Corte Suprema: 704; de Santa Fe, 302; de San Luis, 3; de San Juan, 7; de Mendoza, 37; total, 1083. Le corresponderán, además, por año, de la Capital, 243; de Santa Fe, 124; de San Luis, 14; de San Juan, 3, y de Mendoza 24, lo que hace un total de 508.

Quedará entonces, una existencia de 1083 por un lado y 508 por otro.

A la de Buenos Aires le corresponderá, según el proyecto, en segunda y última instancia, de las causas existentes en años anteriores, calculando al proporción con que ha contribuido á formar el total de causas, ó sea en la sexta parte, 352; Pampa Central, 48; demás territorios anexados, 19 Total, 419.

Al distrito que tiene por cabeza la ciudad de Córdoba, le correspondería, según el proyecto, en segunda y última instancia, de las causas existentes de años atrasados en la Suprema Corte, deduciendo las de su exclusiva competencia y calculando en la misma forma que para las anteriores, la proporción de la veinticuatro avas partes, ó sea ochenta y ocho, y de las demás provincias ciento veinticuatro; total de existentes, doscientas doce, que, agregadas á las que tiene actualmente, haría un número de trescientas causas; y las del Paraná quedarían en la misma proporción en que se han establecido las anteriores, doscientas causas.

Debo advertir, señor Presidente, respecto de Córdoba, que se hizo esta afirmación, que fué comprobada y no contradicha en esta Cámara en 1896: que existían mil causas en los tribunales ordinarios, de competencia de los tribunales federales, por razón de las personas, cuyos actores habían renunciado al fuero federal por tener ante los tribu-

nales ordinarios el privilegio de una apelación fácil.

Esta observación es perfectamente aplicable á todos los demás distritos.

Hay una enorme desproporción entre las causas que se fallan en primera instancia y las que se apelan.

Por eso es que el Senado votó en 1896 la corte de Córdoba, exactamente como se encuentra ahora, una corte en el litoral, con una pequeña variación, y la corte de la Capital.

Propiamente, el único organismo nuevo ó ageno á la sanción de esta Cámara en otra época, que se incorpora, es el correspondiente á la Provincia de Buenos Aires.

Pero, señor Presidente, la estadística, tomada en el caso más desfavorable, que es el presentado por la Comisión, nunca llegará á probar la inutilidad de estos tribunales. Argüiría cuando más en contra de la división de los distritos, división seguramente inadecuada; porque, al fin, con dos cámaras en la Capital, agregada á esta la Provincia de Buenos Aires, y la Provincia de Santa Fe agregada á la cámara de Entre Ríos, habría quedado perfectamente equilibrado y distribuido el trabajo.

¿Pero, por qué no se ha hecho la corrección, señor Presidente?

No se hizo porque se tuvieron en cuenta, de acuerdo con el señor Ministro de Justicia, motivos que hasta cierto punto había que respetar, corrientes que se encauzaban por razones de simpatía y muchas otras consideraciones hacia un punto determinado, que, aunque desequilibren algo el trabajo de las cámaras, es necesario tolerar y consentir. A eso ha obedecido la Comisión para mantener los distritos en la forma que los ha sancionado la Cámara de Diputados.

La Comisión tampoco ha creído que deban mirarse tan sólo las conveniencias del presente. Se trata de organismos destinados á vivir muchos años, organismos que dentro de muy poco tiempo han de prestar todos los servicios que la ley pueda exigir de ellos, porque no hay duda, señor Presidente, que las apelaciones disminuyen por la

dificultades para venir á la Corte Suprema.

Si han sido necesarios cuarenta años para tocar la ley de organización de la justicia federal, debemos suponer que otros tantos pasarán, por lo menos, para poner manos sobre la que discutimos si al fin se sanciona. Y en ese tiempo es más que seguro que habrá prestado todos los servicios y habrá consultado todos los intereses que deben tenerse en vista en este caso.

Por otra parte, no sería esta la primera vez, no sólo en el orden de los progresos intelectuales y morales del país, sino también en el orden del progreso material, que el Congreso de la Nación votase instituciones como las actuales, que no prestan todos los servicios que deben prestar desde el primer día. Podría citar muchísimos ejemplos; pero, no lo haré, en obsequio á la brevedad.

Las reformas que la Comisión ha introducido en el proyecto de la Cámara de Diputados, están bien indicadas en la orden del día; los señores senadores me han de permitir que no haga referencia á ellas, para no fatigarlos, y, además, porque puedo hacerlo en la discusión en particular.

Estas consideraciones, brevemente expuestas, son las que la Comisión ha tenido en vista para despachar este proyecto en la forma en que lo hace, y cree que el honorable Senado, votándolo, hará obra de conveniencia nacional y obra de patriotismo.

He dicho.

Sr. Figueroa—Pido la palabra.

La convicción que tengo de que este proyecto viene al debate en el momento menos oportuno, me obliga á hacer uso de la palabra y á fundar mi voto.

Proyectos de esta naturaleza, de carácter permanente, que no se pueden deshacer por otras leyes, como es la creación de tribunales de justicia, deben discutirse, no al terminar el año, cuando todos los senadores están cansados y en momentos en que falta el tiempo y la tranquilidad necesaria para estudiarlos, sino que me parece fundamental que, en el estado financiero actual de la República, estos proyectos debieran haberse

aplazado, para ser considerados en las sesiones del año que viene, con mayor tranquilidad y con mejor conocimiento de todas las causas que los han motivado.

No es un misterio nuestro estado financiero: que tenemos deudas ejecutivas en Europa, y el gobierno, para atender á ellas, trata de hacer uso de los recursos que tiene reservados en el Banco de la Nación. No es un misterio tampoco para nadie los enormes gastos producidos ya por esta delicada situación internacional porque hemos pasado, cuya situación aun no está despejada, por lo menos, del todo; de manera que no puede inspirar confianza á los capitales, á las industrias y á todos los intereses, tanto nacionales como extranjeros, que se desenvuelven aquí.

Son estos momentos tan difíciles, tan delicados, que no sabemos si la renta pública calculada para el año próximo, será la misma que ha producido este año; no sabemos todos los nuevos compromisos que tendremos que contraer para garantizar la paz pública; y, por lo tanto, reputo un deber primordial no aumentar gastos con estas creaciones de carácter permanente, que aumentan en 300.000 pesos el presupuesto, cuando se puede esperar cuatro meses, en que se abrirá el nuevo período de sesiones, pues, dado el estado financiero de la República, es un acto de prudencia y buena política no sancionar este proyecto, aplazándolo.

Pero como no he tenido tiempo para hablar particularmente con los señores senadores, para saber si están dispuestos al aplazamiento, me veo obligado á negarle mi voto, no obstante desear que él entrara en discusión en momentos propicios, en que tuviéramos el tiempo bastante para conocer el movimiento de los tribunales en las diversas secciones en que se crean las cámaras, que permitieran tener una estadística verdadera para hacer la distribución racional. Yo no tengo fe en estas estadísticas que se nos presentan, y daré la razón. Hace cinco ó seis años que ví figurar en la memoria de algunos juzgados federales una cantidad muy grande de causas y averiguando supe que casi la totalidad de ellas provenían de ejecuciones

del Banco Nacional en liquidación, aunque los deudores habían arreglado sus deudas ó porque el Banco no había encontrado bienes para embargar, figuraban en el juzgado únicamente para los efectos de la estadística, porque los jueces no pueden, de oficio, dar por terminadas causas que realmente lo están. Por todos estos motivos, y especialmente por razones de economía que he apuntado, pues este proyecto importa un recargo de 300.000 pesos al año, votaré en contra.

Sr. Palacio — La Comisión, como manifesté, ha tenido en cuenta las razones aducidas por el señor Senador por Catamarca, y fueron ellas una de las principales por que llamó á su seno al señor Ministro, á fin de saber las razones que fundamentaban este proyecto, é instó el Ministro su despacho, agregando, que era mayor la suma de intereses afectados, mayores las pérdidas, que los gastos que originarían estos tribunales. Este asunto se viene aplazando anualmente y el mal entretanto se agrava; debemos una vez por todas solucionarlo, y por esto voy á votar en contra del aplazamiento.

Sr. Figueroa — Yo no he hecho indicación de aplazamiento; he dicho que hubiera deseado se aplazase.

Sr. Aparicio — Desearía saber del señor miembro informante de la Comisión si el señor Ministro de Justicia está del todo conforme con el pensamiento de la Comisión.

Sr. Palacio — Completamente; ya lo he manifestado anteriormente. La Comisión ha tenido tres conferencias con el señor Ministro, quien quedó plenamente de acuerdo con todo este proyecto.

Sr. Aparicio — Creo que sólo había dos cortes en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Sr. Palacio — El señor Ministro en la Cámara de Diputados manifestó eso; pero, llamado al seno de la Comisión, manifestó la plena conformidad del Poder Ejecutivo sobre este proyecto, tal cual está aquí.

Sr. Presidente — Se va á votar si

se aprueba en general el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Aparicio—El señor Senador por Catamarca ha hecho moción de aplazamiento.

Sr. Presidente—No ha formulado ninguna moción. Está en discusión particular el artículo 1º. No haciéndose uso de la palabra, se va á votar si se aprueba dicho artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Palacio—Artículo que no sea observado, se podría dar por aprobado.

Sr. Figueroa—Debe votarse artículo por artículo para facilitar la discusión

—Asentimiento.

Sr. Presidente—Habiendo conformidad, así se hará.

—Se lee el artículo 2º.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Pellegrini—Hago moción para que se dé por aprobado todo artículo que no se observe.

—Suficientemente apoyada la moción, se vota y aprueba, sancionándose en seguida, sin observación, los artículos del 2 al 11 inclusive.

—Se lee el 12.

Sr. Puccio—Pido la palabra.

En general, he votado con la Comisión, porque soy partidario de la descentralización de la justicia federal, como un medio de ponerla al alcance de los que la necesitan, y porque así será más rápida y más barata; pero, en particular, no estoy conforme con la ubicación que el artículo 12 da á la cámara federal que podríamos llamar del litoral; creo que esa cámara debe estar ubicada en la Provincia de Santa Fe, con jurisdicción en ella y en las de Entre Ríos y Corrientes y algunos territorios federales.

Los medios de comunicación que tiene hacen que esté más al contacto que las otras, con todo el territorio que abarca la jurisdicción del litoral.

Además, la Provincia de Santa Fe

está compuesta de una población de cuatrocientos á quinientos mil habitantes, de los cuales la tercera parte son extranjeros, lo que hace que se produzcan más causas del fuero federal que en Entre Ríos y Corrientes, donde la mayoría de sus habitantes son argentinos. Esto lo prueba la estadística que da al juzgado federal de la Provincia de Santa Fe, fuera de las falladas, alrededor de 3800 causas en tramitación. Por otra parte, la Provincia de Santa Fe cuenta entre sus poblaciones la del Rosario, que se puede afirmar es la segunda ciudad de la República, por su comercio y su población, en la que domina el elemento extranjero y en la que se inician juicios muy importantes por los intereses que se ventulan.

Establecida la Cámara Federal en la Provincia de Santa Fe, respondería mejor á los fines de su creación, porque estaría colocada en la localidad que más la necesita y que más representa dentro de la jurisdicción que abarca.

El mismo Senado, en la sanción que dió el año 96 al proyecto de creación de cortes de circuito, fundándose en estos hechos, ubicó la corte del litoral en Santa Fe, con jurisdicción en Entre Ríos, Corrientes y algunos territorios federales

Ese proyecto caducó, por no haberse sancionado definitivamente dentro de los dos años que determina la ley de caducidad. Ahora, sin haber variado las causas que motivaron aquella sanción, la honorable Cámara de Diputados sanciona un nuevo proyecto modificando, entre otras cosas, el número y ubicación de las cámaras. Estas modificaciones no deben aceptarse por el honorable Senado, para ser consecuente con su anterior modo de pensar.

Si el honorable Senado desea que esta ley produzca los beneficios que se propone, es necesario mantener la ubicación que hizo en 1896, estableciendo el asiento de la cámara del litoral en la Provincia de Santa Fe.

He dicho.

Sr. Aparicio—Pido la palabra.

El año 96 tuve el honor de pertenecer á la Comisión de Legislación que acon-

sejé las tres cortes nacionales de circuito, y creo todavía, como entonces, que lo más equitativo es hacer la distribución del trabajo en la forma que acaba de indicar el señor Senador por Santa Fe: esto es, formar una corte con jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes con residencia en la ciudad de mayor población é importancia judicial, como lo es el Rosario. He de acompañar, pues, al señor Senador por Santa Fe en su moción, consecuente con lo que antes opiné.

Yo habría preferido dos cortes solamente, como lo insinuó el señor miembro informante; pero, no hago cuestión de eso, porque comprendo el espíritu de la Cámara y sólo objeto la distribución que de ellas se ha hecho en el sentido que lo he indicado

Sr. Palacio—Pido la palabra.

Como lo he indicado oportunamente, refiriéndome á la estadística de las causas apeladas, dije que podía, tal vez, ser censurada la división, pero que habían existido consideraciones de un orden diverso, pero elevadas también, que habían determinado la ubicación actual. De todas maneras, yo creo que es una cuestión que no vale la pena de hacerse; no tiene mayor importancia que una provincia tenga un poco más de asuntos del fuero federal que otra, y he visto con muchísima pena que los señores representantes de Santa Fe hayan puesto este dilema: O la Provincia de Santa Fe es asiento de cámara, ó nos adherimos á la jurisdicción de Buenos Aires.

Señor: la ley en esa parte los ha dejado en la jurisdicción de la Capital, como ellos anhelaban, y así se quedarán con su justicia siempre tibia y dispendiosa, como lo ha manifestado el mismo señor Senador por Santa Fe.

Hacer estas reformas, es hacer peligrar la ley, porque tengo la íntima convicción de que cualquiera alteración que haga el Senado, va á evitar su sanción definitiva.

No estoy lejos de pensar, ateniéndome á numerosos informes, que habría sido conveniente la ubicación de la corte en Santa Fe, y entonces habríamos visto que los representantes de

esa Provincia hubiesen aceptado gustosos el voto de la Cámara; pero, como no veo la magnitud de los intereses que se indican para introducir esa reforma, creo que la debemos dejar de lado para no hacer peligrar, como he dicho, la ley.

Estas son las razones por las cuales no acepto las modificaciones solicitadas por el señor Senador por Santa Fe.

Sr. Avellaneda—Pido la palabra.

De la discusión promovida para fijar esta corte, resulta que todas las opiniones están conformes en que la jurisdicción de la corte del litoral debe ser Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y los territorios del Norte. Como yo voy á votar porque la ubicación sea en el Paraná, pido que se vote por partes este artículo, pues votaré porque Santa Fe se agregue á la del Paraná.

Sr. Presidente—Se votará entonces por partes este artículo.

—Se vota por partes el primer párrafo del artículo 1º y se aprueba.

—En discusión el segundo párrafo del artículo.

Sr. Avellaneda—Pido la palabra

Yo deseo que la Comisión nos dijera algunas palabras sobre la proposición que acabo de hacer, es decir, si es ó no conveniente.

Sr. Palacio—Al informar en general, he manifestado, con la estadística, tomada en los casos más desfavorables, que lo único que podría decirse de ella es que los distritos estaban inconvenientemente distribuidos; pero, ha habido consideraciones de otro orden que se refieren á la sanción misma del proyecto; consideraciones que han puesto á la Comisión en el caso de aceptar el número y distribución sancionada. Esas mismas manifestaciones las repito ahora, contestando al señor Senador.

Agregando la Provincia de Santa Fe á Entre Ríos, es indudable que ya se coloque la corte en el Rosario ó en Santa Fe, el resultado será el que antes he expresado.

Sr. Presidente—Se va á votar si Santa Fe queda agregada á la jurisdicción de la Capital.

—Se vota y resulta empatada la votación.

—Se vota nuevamente y dando el mismo resultado dice el

Sr. Presidente—Voto porque la Provincia de Santa Fe sea incorporada a la jurisdicción del Paraná.

—En seguida se vota y aprueba hasta el artículo 25 inclusive.

—Se lee el 26.

Sr. Puccio—Pido la palabra.

No veo por qué á los miembros de las cámaras federales de las ciudades de Córdoba y Paraná se les pone menos sueldo que á los de La Plata, siendo así que la cámara del Paraná, con la agregación de la jurisdicción de Santa Fe, queda con tanto ó más trabajo que la de La Plata, siendo los intereses que en ellas se ventilarán tan importantes en una como en otra.

Además, el juez federal del Rosario que va á estar subordinado á la Cámara del Paraná, tiene mayor sueldo, y no es justo que los miembros de la cámara, que son superiores en jerarquía, estén menos remunerados que el juez.

Por esta razón, pienso que los miembros de las cámaras federales del Paraná y Córdoba deben tener el mismo sueldo que los de La Plata.

Sr. Palacio—La Comisión, para fijar estos sueldos, ha tenido en consideración dos razones: primera, el trabajo de las cámaras según las estadísticas hechas; segunda, las condiciones de vida en Córdoba y Entre Ríos, informaciones tomadas; respecto de esta última, del señor Senador, miembro de la Comisión de Legislación, que representa á ese estado.

Indudablemente, habiendo variado la jurisdicción de ese departamento, queda mayor número de trabajo para esa cámara del Paraná.

Sr. Puccio—La vida no es más barata en el Paraná que en La Plata.

Sr. Palacio—Me refiero á los informes suministrados por el señor Senador por Entre Ríos.

Sr. Puccio—Hago moción para que se ponga igual sueldo que á los de La Plata á los miembros de las cortes del Paraná y Córdoba.

Sr. Palacio—De todas maneras, como los sueldos que por esta ley se fijan solamente están en vigencia mientras se

incluyen en el presupuesto, quiero decir que podrían ser aumentados con más meditación y equidad.

Sr. Aparicio—Veo que aquí se ha puesto: gastos de oficina 500 pesos. Esto debe ser un error; no se puede gastar tanto.

Sr. Palacio—Son gastos de instalación y arreglo de una casa el primer año.

Sr. Aparicio—Debería decirlo.

Sr. Pellegrini—Los gastos de oficina son cincuenta pesos.

Sr. Maciá—Son para la fiscalía, y estos 500 pesos se han puesto en el concepto de que sean para muebles é instalación de la casa. Así se podría consignar la partida: para el primer año, pues el segundo desaparecería.

Sr. Avellaneda—Creo que es conveniente corregir el artículo; porque, una vez que se pone 500, esa partida queda siempre; lo conveniente sería poner 50 pesos para gastos de oficina; en el presupuesto del Ministerio hay una partida para esos gastos; de allí puede tomarlos el Ministro.

Sr. Maciá—Yo voy á insistir en mi moción, que consiste en que se consigne esto: gastos de oficina. 50; gastos de instalación durante el primer año—450, para que se vote, si es rechazado el de la Comisión.

Sr. Presidente—Se va á votar el artículo de la Comisión, con la supresión que ha propuesto el señor Senador por La Rioja y que ha aceptado la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Puccio—Falta votar el aumento á los sueldos de los vocales, que he propuesto.

Sr. Palacio—Había pedido al señor Senador que no insistiera en su modificación, pues esa desigualdad se podrá reparar cuando se sancione el presupuesto, que será en breve.

—Se lee y aprueba en seguida el resto del proyecto.

III

Sr. Presidente—El señor Ministro de Hacienda ha comunicado que se encuentra enfermo y que sólo podrá concurrir el martes á la discusión del proyecto financiero.

No habiendo más asuntos de que tratar, ha terminado la sesión pública, é invito al Senado á pasar á sesión secreta.

—Eran las 4 y 40 p. m.

ARTURO PARODY,
Director de Taquígrafos.